EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LOS PERIODISTAS

Impulsada por una ambiciosa reforma constitucional que entró en vigor en junio de 2008, el sistema de justicia penal en México transita desde el actual modelo inquisitorio hacia uno de tipo acusatorio. Al aprobar esa reforma, los legisladores establecieron un periodo de ocho años para implementar los cambios estructurales en los niveles federal y estatal.

Cuatro años después, la mayoría de las entidades federativas ha adecuado ya su constitución local y varias de sus leyes y códigos, como primeros pasos hacia la transformación, y en varias de ellas, como parte del mismo proceso, conviven el viejo y el nuevo sistema. Hasta ahora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Yucatán y Oaxaca van a la cabeza en cuanto a la implementación integral, sin que pueda decirse todavía que en alguna de ellas el nuevo sistema funcione de manera óptima.

La modernización normativa y material del sistema es apenas una base, pero por sí misma no vencerá las viejas prácticas del modelo inquisitorio. En el capítulo sobre México del *Informe Mundial 2012*, bajo el apartado «Sistema de Justicia Penal» [pp. 58-59], Human Rights Watch destaca como positivo el que en México se aprobara una reforma constitucional que «incluye medidas esenciales para promover un respeto más amplio de los derechos fundamentales, como la inclusión de la garantía de presunción de inocencia» —Artículo 20 constitucional.

Pero al mismo tiempo lamenta que «sólo unos pocos estados han comenzado a adoptar cambios de fondo», de modo que prevalecen la corrupción, la falta de capacitación, la insuficiencia de recursos públicos, el abuso policial y la nula rendición de cuentas.

Sucede que modernizar el «modelo mental» de los actores que intervienen en el sistema (policías, fiscales, defensores, jueces), tantas veces anclado al decrepito modelo inquisitorio, tomará más tiempo y exigirá un mucho mayor esfuerzo colectivo que reformar leyes y construir o adaptar edificios. La única posibilidad de que esta transición derive en un nuevo sistema eficiente, justo y que rinda cuentas es el cambio cultural dentro de las instituciones y la sociedad donde estamos insertos los periodistas.

La persistencia de los «tribunales mediáticos» es un síntoma de las poderosas resistencias del sistema inquisitorio frente a los cambios estructurales en curso. La credibilidad de las «sentencias» y «condenas» mediáticas de facto es tan dudosa como el juzgar un hecho con base nada más en aquello que se atisba por una rendija. Los «juicios» ante la audiencia, basados en fragmentos de realidad, pretenden convencernos de que esa es la realidad incontrovertible.

Los «tribunales paralelos» son, en suma, una maquinaria que criminaliza, estigmatiza, denigra y discrimina masivamente a ciudadanos y ciudadanas todos los días, contradiciendo los principios del debido proceso, los derechos de personalidad y la protección de datos personales que el nuevo sistema aspira a proteger —de acuerdo con el espíritu de la reforma constitucional.

Y no obstante, sobreviven inducidos por servidores públicos; consumados por los medios a través de nosotros los periodistas; protagonizados lo mismo por imputados que por víctimas de delito, y presenciados por un público mayoritariamente apático frente a la arbitrariedad.

En lo que toca a los medios informativos y los periodistas, este complejo escenario plantea interesantes paradojas; por ejemplo:

▪ Muchas veces somos severos críticos del desempeño de las instituciones y los servidores públicos del sistema de justicia penal inquisitorio, pero nuestras agendas editoriales y contenidos noticiosos se basan casi exclusivamente en la información proveniente de ellos, obtenida por canales formales o informales.

▪ Llegamos a exaltar, por el contrario, las supuestas virtudes de las leyes y las instituciones tal como estaban antes de la reforma, atribuyendo su mal funcionamiento al comportamiento de servidores públicos.

▪ Descalificamos la reforma y su implementación sin hacer una inversión editorial para:

- a) revisarlas y discutir de cara al público;
- b) mostrar sus ventajas y desventajas;
- c) compararlas respecto del estado de cosas en el modelo inquisitorio;
- d) dar voz a quienes proponen perfeccionarlas o corregir las distorsiones;
- e) debatir acerca de los intereses en juego;
- f) hacer seguimiento de casos en el mediano y largo plazo;
- g) revisar la manera como están utilizándose los recursos públicos;

h) transparentar ante el público el trasfondo de los «tribunales mediáticos» y sus implicaciones para la legalidad, los derechos de los imputados y las víctimas, el erario público y la ética comunicacional;

i) denunciar ante la ciudadanía posibles casos donde haya retrocesos hacia el modelo inquisitorio, violación de derechos humanos, ineficiencia, arbitrariedad o corrupción;

j) capitalizar las ventajas de acceso a la información que ofrecen, con la finalidad de elevar la calidad y la veracidad de las noticias que proveemos a la comunidad.

▪ En los estados con mayor avance en la implementación, desaprovechamos las posibilidades que nos ofrece el nuevo sistema en cuanto a acceso a la información, presionando para que prevalezcan las «presentaciones» de detenidos, aunque sea de manera extraoficial, mediante arreglos con funcionarios públicos, buscando eludir las restricciones impuestas por el juez para proteger los derechos de imputados y víctimas.

▪ Por primera vez en la historia, los periodistas podremos acceder a las audiencias, pero seguimos arraigados en prácticas periodísticas del

sistema inquisitorio derivadas, en parte, de que los tribunales eran espacios cerrados, poco proclives a que el proceso y las intervenciones de los operadores de dicho sistema tuviera visibilidad.

Lo que hoy vemos... y lo que podremos ver

El sistema penal acusatorio en proceso de implementación abre una ventana de oportunidad a los medios noticiosos y a los periodistas para asumir el rol de *watchdog* sobre el avance de la implementación y si mejora la calidad de la Justicia que el Estado nos provee a los mexicanos a través de sus instituciones.

Durante las etapas procesales, en el sistema de justicia penal de tipo inquisitorio los periodistas podemos ver apenas lo que los funcionarios nos permiten de manera discrecional.

No tenemos más que las «presentaciones», comunicados, atropelladas entrevistas y filtraciones extraídas de averiguaciones previas y expedientes, donde nos ofrecen información a cuentagotas, no necesariamente porque les preocupe resguardar aquello que podría afectar los derechos de los imputados o las víctimas de delito, el curso de la investigación o el juicio mismo —por el contrario, muchas veces este tipo de información nos es entregada deliberadamente—, sino para manipular nuestras noticias.

Por otra parte, los periodistas no somos policías, fiscales ni jueces. Al menos en el ámbito de las noticias, nuestro papel no es el de aclarar delitos, encontrar a los responsables y castigarlos de cara al público, apegados a los cánones de los «tribunales paralelos». Una misión realista y más estimulante es la de vigilar —y denunciar cuando no ocurra así— que el sistema de justicia penal respete los derechos de imputados y víctimas; encuentre y castigue a los verdaderos culpables, de modo que no sigan siendo criminalizados inocentes ni miles de delitos queden impunes; se encargue de que el daño a la víctima sea resarcido; y se asegure de que el culpable cumpla su pena en condiciones justas y dignas para él y su familia, en prisiones cuyos servicios y atmósfera le permitan, al final, reintegrarse a su comunidad.

Hoy la cobertura noticiosa del delito tiene mucho de acto de fe. Conforme sea adecuadamente implementado, el sistema de justicia penal acusatorio nos abrirá a medios y periodistas espacios de visibilidad para conocer a fondo los casos y a sus diferentes protagonistas; los pormenores de cada proceso; el desenlace hasta la imposición y la aplicación de la pena a los sentenciados, y la restitución a las víctimas, con las reservas impuestas por los jueces para proteger los derechos de las partes, en un tiempo razonable que hace viable el

seguimiento noticioso —en la actualidad algo casi imposible, en general, por la opacidad del proceso, la demora de los juicios y el grosor de los expedientes judiciales, aparte de que las poderosas fuerzas contrarreformistas, dentro y fuera del propio sistema, que intentan que esto permanezca.

El Artículo 20 constitucional —merced a la reforma de 2008— impone que el sistema de justicia penal acusatorio se base en cinco principios procesales: publicidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. ¿En qué puede beneficiarnos como periodistas que estos principios se cumplan? ¿Por qué ofrecen una gran oportunidad de acceso a la información? ¿Cómo permitirán elevar la calidad y veracidad de la información que recibirá nuestro público? Las respuestas están en el mandato constitucional:

▪ El **principio de publicidad** impone al sistema de justicia penal acusatorio que las audiencias durante las cuales se desahoga el juicio sean públicas; en los estados pioneros los periodistas ya pueden reportearlas *in situ* —con las obvias reservas dictadas por los jueces para proteger los derechos de imputados y víctimas, incluidos los casos referidos a adolescentes en conflicto con la ley penal.

▪ El **principio de contradicción**, al garantizar que las partes en litigio y sus representantes —el ministerio público, del lado de la víctima, y el defensor, del lado del imputado— tengan condiciones equitativas para presentar su respectiva verdad, nos permite como periodistas presentar las noticias equilibradas.

▪ Merced a **los principios de intermediación, concentración y continuidad**, respectivamente, los jueces deberán estar presentes a lo largo del juicio; el periodo de presentación de pruebas estará acotado, y el juicio tendrá que realizarse en audiencias continuas. Lo anterior nos permitirá conocer los argumentos y las decisiones de los jueces, así como seguir de principio a fin cada caso, sin demoras de meses. Cada vez será menos creíble la justificación de que «¡Los periodistas no tenemos el tiempo de esperar a los jueces!»⁴.

⁴ LARA KLAHR, Marco, *No más «pagadores»*. *Guía de periodismo sobre presunción de inocencia y reforma del sistema de justicia penal*, Proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Initiative/Embajada Británica en México/Article 19, México 2011, p. 24.

Tras años de resistencia al cambio, en estados como Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Morelos muchos medios y periodistas se dicen frustrados porque el nuevo sistema acusatorio no ha conseguido erradicar prácticas del inquisitorio.

Como muestra, leamos las principales preocupaciones de colegas chihuahuenses mencionadas durante el Taller de Periodismo *El Sistema Penal y el Acceso a la Información. Desafíos y Alcances* [Chihuahua, Chihuahua, marzo 16-17, 2012]:

1. Quienes desde el gobierno implementan el sistema de justicia acusatorio han menospreciado su operativización política; reformaron leyes e instituciones, y capacitaron como sea a los operadores, pero desdeñaron la sensibilización y profesionalización sistemática de un actor tan relevante como los periodistas. Un colega lo describió así: «Hemos vivido este proceso aislados y eso ha producido reticencias del gremio», mientras que otro consideró que lo anterior fue parte de una estrategia deliberada de desinformación.
2. Los periodistas siguen teniendo lagunas sobre la «complejidad técnica» del sistema implementado.
3. Hay prácticas comunicacionales de la policía

municipal, la Fiscalía General del Estado, la Policía Federal y el Ejército contrarias al espíritu de la reforma.

4. Los jueces llegan a comunicar de manera ineficaz y autoritaria sus decisiones de imponer reservas de información durante las audiencias públicas, y temen aparecer en televisión razonando sus decisiones.

5. Las audiencias públicas muchas veces son simulaciones donde los ministerios públicos acuden no a debatir, sino a leer escritos, como en el viejo sistema.

6. No hay reglas claras sobre la información que debe ser reservada.

7. En las instituciones que intervienen en el sistema no hay comunicadores profesionales que hayan sido periodistas y comprendan sus necesidades.

8. En ciertas coyunturas, la agenda de los políticos avasalla las decisiones judiciales y las reglas de respeto a los derechos que impone el sistema acusatorio.

9. Al final, la desconfianza en el sistema persiste y eso no permite a los periodistas comprender y transmitir siquiera las razones legítimas de la reforma.

10. El periodismo está inmerso en una tradición jurídica inquisitoria que conjura contra

el espíritu garantista del sistema acusatorio.

11. En los medios prevalecen enfoques y agendas fundamentados en la denigración y juzgamiento de personas imputadas de delito y hasta de las víctimas⁵.

Pero como se ha insistido, el cambio cultural será lento y arduo, y en muchos sentidos depende de que el proceso de implementación sea acuciosamente vigilado por los medios y los periodistas como parte de una agenda editorial proactiva. Una forma de desempeñar esta función de *watchdog* es la de informar sobre los casos judiciales de forma oportuna, veraz, contextual, integral y al mismo tiempo respetuosa de los derechos de víctimas y acusados, conociendo sus particularidades procesales para transmitir las con eficacia a la comunidad.

⁵ LARA KLAHR, Marco, «La 'mala prensa' del sistema penal acusatorio» en www.lasillarota.com.